

Información sobre Venezuela

SECTOR ELÉCTRICO

• *Alarma frente a posible crisis energética*

En la última edición de este Boletín se hizo referencia a la posible crisis que amenaza al sector eléctrico, debido a la delicada situación hidrológica de la represa del Guri, así como a la indisponibilidad del parque de generación térmica para satisfacer la demanda, cuya tendencia creciente se mantiene. Ahondando un poco en las razones de esta indisponibilidad de los generadores térmicos, cabe resaltar que la misma se debe a 3 factores fundamentales: en primer lugar, la obsolescencia del parque térmico, que resta eficiencia a su producción; en segundo lugar, la falta de mantenimiento de los generadores existentes, que ha acarreado la parada de una gran parte de ellos (Planta Centro, la termoeléctrica más grande de Latinoamérica, sólo tiene en operación 2 de sus 5 unidades generadoras); por último, la indiferencia del Estado y de los inversionistas privados, que no ha respondido al crecimiento de la demanda con la instalación de nuevas unidades.

Es importante tener en cuenta que en Venezuela la generación térmica cubre cerca del 30% de la demanda. El resto es atendido con producción hidroeléctrica, la cual proviene en su mayoría de los complejos generadores instalados en el río Caroní (Guri y Macagua). Debido a las alteraciones climatológicas ocurridas a nivel mundial, las cuales se prevé durarán por algunos años más, la generación hidroeléctrica ha perdido confiabilidad. Ante la amenaza de fuertes e inminentes racionamientos, b cierto es que los correctivos necesarios para prevenir una crisis de grandes proporciones deben tomarse en el corto plazo. Ello implica que

tendrán que adoptarse medidas de distinta naturaleza, que permitan contrarrestar los efectos de la crisis.

En este orden, resaltan las medidas dispuestas por el Presidente de la República en el reciente Decreto N° 1.717 del 22 de marzo de 2002, publicado en la G.O. N° 37.411 de fecha 25 de marzo de 2002, para afrontar la situación natural y coyuntural que pone en riesgo la continuidad del servicio eléctrico:

- (i) Las empresas eléctricas podrán, previa aprobación de la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas, **modificar los términos de los contratos de suministro de energía que hayan suscrito**, para establecer límites al consumo.
- (ii) Las empresas eléctricas podrán acordar, previo acto motivado, **contrataciones por adjudicación directa** dirigidas a contrarrestar el riesgo potencial de insuficiencia en el suministro de energía eléctrica.
- (iii) En particular, se faculta a las empresas del Estado que prestan el servicio eléctrico, previa aprobación del Ministerio de Energía y Minas, para celebrar **acuerdos de compra con proveedores independientes de electricidad** a los fines de atender la demanda nacional.
- (iv) Se ordena que los Ministerio de Energía y Minas y de la Producción y el Comercio definan **mecanismos especiales de ajuste tarifario** que faciliten la aplicación de programas de ahorro energético.
- (v) **Se exoneran del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), del arancel de importación y de las tasas aduanales, por 2 años, las importaciones de bienes** necesarios para la generación de energía eléctrica, realizadas por empresas dedicadas a dicha actividad. Estas exoneraciones sólo se aplicarán a los bienes determinados por el SENIAT en una providencia que deberá dictar al efecto. Los contribuyentes interesados deberán solicitar a la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas una constancia que certifique que el bien a ser importado será destinado a la atención de la crisis energética. Una vez cumplido este requisito, el SENIAT deberá dar curso a las solicitudes de exoneración y proceder al

CONTENIDO DE ESTA EDICIÓN

- 1 Información sobre Venezuela
- 2 Información Regional
Para información adicional sobre los tópicos tratados en este número, favor contactarnos en info@abogaconsult.com

desaduanamiento de los bienes importados.

(vi) **Se exonera del I.V.A., por 2 años, el suministro de energía eléctrica** que se efectúe entre empresas prestadoras del servicio eléctrico, directamente o a través de sistemas interconectados.

- **Modificado régimen de control administrativo y financiero de las empresas del Estado**

Las recientes modificaciones introducidas al régimen jurídico de control administrativo y financiero aplicable a las empresas del Estado, en particular por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley sobre Adscripciones de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los Órganos de la Administración Pública, han reformado algunos de los procedimientos y requisitos que deben cumplir estas empresas para realizar contrataciones, constituir empresas, enajenar bienes y contraer compromisos financieros. Sin duda la novedad de este estado del Derecho requerirá un examen cuidadoso de las operaciones que han de realizar las empresas eléctricas del Estado, para atender el riesgo potencial de insuficiencia en el suministro eléctrico.

- **Empresa Nacional de Transmisión entre los proyectos del Ejecutivo Nacional**

Tras considerar que la infraestructura nacional de transmisión eléctrica y las actividades que en la misma se soportan constituyen sectores estratégicos de seguridad y defensa y de crecimiento de la actividad económica nacional, el Ejecutivo Nacional dispuso mediante Decreto publicado en la G.O. N° 37.400 de fecha 8 de marzo de 2002, la creación de una Comisión Interministerial, integrada por los Ministros de Energía y Minas y de Planificación y Desarrollo, con el objeto de proponer al Presidente de la República las medidas conducentes para la creación de una Empresa de Transmisión Nacional de Energía Eléctrica. En tal sentido, la Comisión estudiará y propondrá las formas de integrar los bienes de las empresas estatales CADAPE y EDELCA, para constituir el capital social y patrimonio de la nueva empresa estatal. Para cumplir su cometido, la Comisión podrá solicitar, si así lo juzga conveniente, la opinión de funcionarios públicos y demás personas especializadas en la materia.

SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

- **Apertura en los servicios de telefonía de larga distancia**

Continuando con el proceso de apertura de las telecomunicaciones en Venezuela, el pasado 19 de marzo de 2002 CONATEL dictó la "Resolución para el Acceso de los Abonados de los Servicios de Telefonía Fija Local a los Servicios de Telefonía de Larga Distancia mediante Selección por Previa Suscripción." De este modo, se implementa en Venezuela un sistema de

selección llevado a cabo por un "tercero independiente" (el Administrador de la Base de Datos o ABD, que en el caso venezolano es la empresa NCS Pearson), que se encargará de validar las solicitudes de los operadores de larga distancia que hubieren sido seleccionados por los abonados, a fin de que las llamadas de larga distancia que éstos realicen sean automáticamente cursadas a través de sus redes. Aunque la regulación prevé también un sistema de selección "por marcación", por el cual el abonado podrá seleccionar "llamada por llamada" al operador de larga distancia de su preferencia, mediante la marcación del prefijo asignado a dicho operador, por lo pronto habrá que conformarse tan sólo con el mecanismo de selección por previa suscripción, cuya disponibilidad deberán ofrecerla los operadores de telefonía local a partir del próximo 5 de abril de 2002.

- **"Reventa" de servicios de telecomunicaciones.**

La prestación de servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía fija y móvil, servicios de telefonía de larga distancia nacional e internacional, servicios de transporte, etc., requiere la obtención previa de la respectiva licencia otorgada por el Ente Regulador CONATEL. Sin embargo, la reventa de dichos servicios por parte de terceros, los cuales serían técnicamente prestados por un operador habilitado para ello, no se encuentra regulada en Venezuela. Por lo tanto, la reventa de servicios de telecomunicaciones constituye una oportunidad de negocios para aquellas empresas que deseen satisfacer a sus clientes e incursionar de manera expedita y ligera en el negocio de las telecomunicaciones sin incurrir en los costos, gastos y obligaciones que implica la obtención de licencias telecomunicacionales. Así, la posibilidad de reventa de servicios de telecomunicaciones abre un abanico de posibilidades en la integración de propuestas de servicios que incluyan servicios de telecomunicaciones solamente o en adición a los principales de la empresa oferente, sin que el revendedor de estos servicios necesite la autorización del ente regulador para ello. Sólo necesitaría imaginación y socios estratégicos debidamente habilitados por CONATEL para prestar los servicios específicos. Este es precisamente uno de los beneficios de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la apertura que aún no ha comenzado a ser aprovechado en nuestro mercado.

TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES

- **Modificación de la competencia jurisdiccional en materia de contratos administrativos**

Por sentencia de fecha 12 de marzo de 2002, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sentado que "una interpretación coherente del ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia con los principios contemplados en la nueva Constitución y el sentido original de ese texto legal como instrumento destinado a organi-

zar transitoriamente la jurisdicción contencioso administrativa”, determina que en materia de contratos administrativos, la competencia de la Sala se circunscribe en principio al conocimiento de las causas relacionadas con contratos suscritos con la República, ya que la competencia para conocer de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de contratos administrativos celebrados por los Estados y Municipios, sólo corresponde a la Sala Político Administrativa cuando la trascendencia y repercusión en el colectivo del asunto debatido así lo amerite. Así, los pleitos que no tengan esa trascendencia y repercusión en el colectivo (tales como los relacionados con contratos sobre terrenos ejidos), corresponde conocerlos a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo (regionales). Hasta tanto no se promulgue la nueva ley sobre el contencioso administrativo, corresponderá por lo tanto a la doctrina y a la jurisprudencia interpretar el alcance de esa “particular trascendencia y repercusión en el colectivo” que constituye el criterio rector para la determinación de la competencia jurisdiccional en materia de contratos administrativos celebrados por los Estados y Municipios.

NOTICIAS ECONÓMICAS

• **Devaluación**

Tras la implementación de un sistema de libre flotación a mediados de febrero, la moneda nacional registró una abrupta variación respecto del dólar, llegando éste a cotizarse a más de 1.100,00 bolívares por unidad (lo que significó una devaluación cercana al 30%). Sin embargo, por efecto de las subastas de divisas que diariamente efectúa el Banco Central de Venezuela, la tasa de cambio ha tendido a estabilizarse por debajo de los 950 bolívares por dólar. Esta situación ha provocado un incremento de la inflación, que ha afectado incluso el precio de los bienes de producción nacional.

• **El I.D.B. le imprime valor al dinero efectivo y le resta valor al dinero electrónico**

El Impuesto al Débito Bancario (I.D.B.) llegó para gravar los débitos o retiros realizados en los bancos e instituciones financieras, es decir, los débitos registrados en las cuentas existentes en el mercado financiero. Sin duda alguna se trata de un burdo mecanismo que resquebraja el equilibrio económico financiero en las relaciones comerciales. Así, pues, el Estado optó, como ha sido costumbre de los últimos gobiernos para disminuir el déficit fiscal, por disfrazar de legalidad una medida confiscatoria, permitiéndose el apoderamiento del 0.75% del monto de cualquier débito financiero sin atender a la capacidad contributiva del ciudadano. Ahora bien, ante esta realidad, las empresas se verán obligadas a optimizar sus procesos de pagos en función del I.D.B. e impedir, al máximo posible, el ingreso de sus fondos al sistema financiero diariamente. Ello para controlar el aumento de sus costos y gastos transaccionales. En este sentido, observamos una clara

oportunidad de negocios para las empresas dedicadas al transporte de valores, las cuales pueden ahora ofrecer un servicio que indudablemente resultará muy atractivo para las empresas que reciban grandes volúmenes de efectivo de sus clientes diariamente. Las empresas de transporte de valores, previa instrucción de sus clientes, pueden tomar el dinero efectivo de éstos en sus oficinas y efectuar pagos a los proveedores de dichos clientes directamente, sin ingresar los fondos al sistema financiero y en esa misma medida, evitar legítimamente que su cliente incurra en el hecho imponible creado por la Ley del I.D.B. En otras palabras, el servicio consistiría en utilizar el dinero efectivo de sus clientes antes que el mismo se transforme en dinero electrónico y caiga bajo el ámbito de aplicación del I.D.B. Seguramente, la contraprestación que solicitarán las empresas de transporte de valores será cuantitativamente menor que la cuantía del I.D.B.

• **Vigencia de la nueva L.I.S.R.**

El 19 de febrero de 2002 se introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 199 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (L.I.S.R.) publicada en Gaceta Oficial el pasado 28 de diciembre de 2001, el cual establece que la nueva ley entra en vigencia el mismo día de su promulgación. La demanda se fundamenta en la prohibición constitucional de que las leyes tributarias entren en vigencia el mismo día de su promulgación, ya que la Constitución establece que toda nueva ley tributaria debe fijar una *vacatio legis* previa a su vigencia. Si el recurso se decide con lugar, necesariamente la nueva L.I.S.R. no podrá aplicarse a aquellos contribuyentes cuyo ejercicio fiscal comenzó el 1 de enero de 2002, sino que deberá postergarse su aplicación hasta el ejercicio que comenzará el 1 de enero de 2003. Es decir, la prohibición de imputar pérdidas de fuente extraterritorial al enriquecimiento o pérdida de fuente territorial, los nuevos regímenes de gravamen de los dividendos, ajuste por inflación y precios de transferencia, no serían aplicables a los ejercicios comenzados el 1 de enero de 2002, debiendo ser postergada su aplicación hasta el 2003. Sin embargo, la demanda aún no ha sido admitida por la Sala Constitucional, a pesar de la urgencia que plantea.

Información Regional

HACIA EL MERCADO COMÚN ANDINO EN 2005

En el camino hacia el Mercado Común en 2005, los países de la Comunidad Andina de Naciones avanzan a pasos agigantados en la eliminación de restricciones al comercio de servicios en la subregión. En particular, esta liberalización ya es una realidad en el caso de los servicios de telecomunicaciones (con excepción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión). En efecto, de conformidad con el cronograma previsto en

la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, todas las restricciones que podían mantener los países miembros sobre tales servicios han quedado levantadas, de modo que en la actualidad incluso los servicios de telefonía básica local, de larga distancia nacional e internacional y los de telefonía móvil terrestre han quedado liberalizados. Sin embargo, en cuanto a los efectos prácticos de esta liberalización, cabe preguntarse si la misma comporta algún beneficio tangible, desde el punto de vista jurídico, para los prestadores de servicios de telecomunicaciones que se propongan operar en más de un país miembro. Al parecer no. En efecto, según la Decisión 462, los proveedores de servicios de telecomunicaciones establecidos en cualquiera de los países miembros de la Comunidad sólo pueden establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de telecomunicaciones en cualquiera de los demás países miembros, previa obtención de la homologación de sus respectivos títulos habilitantes y ello en el entendido de que dicha autorización le será conferida en las condiciones que establece la normativa nacional del país que otorga la homologación, y no según las condiciones, derechos y obligaciones establecidos en el título habilitante otorgado por el país de origen. En este sentido, como quiera que la normativa aplicable a la definición de los servicios, su alcance, así como los derechos y obligaciones que se contraen para prestarlos, es la que establece, define y especifica la legislación nacional del país miembro que homologa el título habilitante, todavía queda un largo camino por recorrer para hacer coincidir las categorías previstas en los distintos ordenamientos internos a los fines de definir los distintos servicios de telecomunicaciones y determinar el régimen jurídico que habrá de aplicarse en cada país miembro. Ante esta problemática, el principio de la "equivalencia funcional" adquirirá sin duda una importancia primordial.

NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

• *Protocolo de Kyoto*

El Protocolo de Kyoto (11 de diciembre de 1997) de la Convención Marco de las Naciones Unidas (9 de mayo de 1992), está abriendo las puertas de lo que será una importante fuente de financiamiento para los países en vías de desarrollo que tengan la capacidad de absorber gases de efecto invernadero (GEI), a través de proyectos forestales. Los países Latinoamericanos tienen una gran oportunidad de beneficiarse con los recursos que se obtengan de la venta de los Certificados de Reducción de Emisiones (CREs) que se expedirán tras cum-

plir con los requisitos que establece el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), entidad internacional encargada de administrar el programa.

• *Mercado Mundial del Carbono*

Los países industrializados producen cerca del 55% de la contaminación mundial, afectando el clima y produciendo altas temperaturas cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Mediante el protocolo de Kyoto adquieren el compromiso de reducir para el período 2008-2012, sus emanaciones de GEI en por lo menos 5% del nivel registrado en 1990. Esta reducción es costosa y además afecta los procesos de producción de dichos países. Por el contrario, los países en vías de desarrollo producen menos emanaciones de GEI y además cuentan con la capacidad para limpiar la atmósfera a bajos costos. Es en estos países donde el buen uso de los recursos naturales se puede convertir en una fuente de ingresos interesante, mediante la oferta a los países industrializados de proyectos forestales que secuestren los GEI, en adición a lo que la naturaleza absorbería en cada región sin la existencia de dichos proyectos. Obteniendo la cantidad indicada de CREs mediante el financiamiento de proyectos destinados a absorber los GEI, un país industrializado puede cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Protocolo de Kyoto. Se estima que el precio de cada CRE (equivalente a una tonelada de CO₂ que se pueda absorber) puede oscilar entre 6 y 19 dólares, dependiendo de la demanda. Se calcula que a un precio bajo de USD 10, un país como Colombia podría recibir ingresos anuales por cerca de USD 450 millones.

• *Avances en Latinoamérica*

Para acceder a los recursos del MDL es necesario que cada país cumpla con una serie de etapas y requisitos sin los cuales no podrá ofertar sus proyectos. En primera instancia, se requiere que la participación sea voluntaria, que se ratifique el Protocolo de Kyoto y que se nombre una autoridad nacional que administre los proyectos a nivel local. Luego, es necesario superar una serie de complejas etapas hasta que se emitan los CREs. Países como Colombia y Nicaragua han visto el potencial que ofrece el MDL y ya están encaminados a reclamar su parte de un mercado naciente con pocos competidores que aún permanecen un tanto ignorantes al respecto. Evidentemente, un país como Venezuela podría aprovechar su potencial de venta de oxígeno para financiar proyectos encaminados a reforestar zonas estratégicas como, por ejemplo, la cuenca alta del río Caroní, la cual se ha visto considerablemente afectada por la explotación del oro.

Venezuelan Insight

ELECTRICITY SECTOR

- **Alarming threat of energy crisis**

In our last issue we referred to the threatening crisis that progressively approaches the electricity sector given the worrying water-level situation of the reservoir called "el Gurí" and the unavailability of sufficient thermo generation resources to satisfy demand.

Amongst the underlying causes bringing up the energy crisis 3 main factors are to be highlighted: First of all, an obsolete hence inefficient thermo generation infrastructure; second, the lack of maintenance of the existing generation infrastructure causing a considerable portion of it to stop operations (currently, only 2 of the 5 electricity generators of "Planta Centro" - the largest hydro electrical plant in Latin America - are operating.); third and last, governmental and private investors indifference before demand claiming for the installation of new electricity generators.

In Venezuela, whilst thermo generation has satisfied approximately 30% of demand, hydro generation has served the rest of it through the infrastructures built in the "Caroní" river ("Gurí" and "Macagua"). However, due to the weather alterations suffered worldwide and also forecasted to last for several years, hydro generation lost its accountability. Therefore, given the threat of a rigorous and imminent electric power rationing, the necessary steps to prevent a crisis of large proportions are to be taken in the short run. Such scenario mandates that different measures be implemented in order to weaken the effects of the crisis.

Following this line of thought, the Venezuelan

INSIDE THIS ISSUE

1 Venezuelan Insight

2 Regional Insight

For any follow up on these newsletter topics, please feel free to contact us at info@abogaconsult.com

President adopted through Presidential Decree # 1717 issued on March 22, 2002, and published on March 25, 2002 in Official Gazette # 37411, concrete executive measures aimed at countervailing the natural and circumstantial factors currently risking the continuity of the electricity service. Such Decree provides:

- (i) That prior authorization by the General Energy Division of the Mines and Energy Department, electricity companies shall be empowered **to modify the terms of their existing power supply contracts**, in order to establish limits on consumption.
- (ii) That prior issuance of reasoned administrative order, electricity companies shall be empowered **to award contracts without biddings** when seeking to diminish the risks of electric power shortage.
- (iii) That prior authorization by the Mines and Energy Department, particularly, State companies rendering electricity services shall be empowered to enter into **purchase agreements with independent power suppliers** with the purpose of serving demand in the country.
- (iv) That the Mines and Energy Department and the Production and Commerce Department shall establish **special rate adjustment mechanisms** which ease the implementation of power saving programs.
- (v) **Value added tax, import and custom duties two-year exonerations for the importation of goods - required for electric power generation** - by companies in this line of business. Such exonerations only cover the goods to be determined by the SENIAT, the Venezuelan tax administration agency. Interested tax payers shall request that the General Energy Division of the Mines and Energy Department certifies that the specific goods being imported will be employed in addressing the energy crisis. Once this requirement is fulfilled, the SENIAT shall attend to the exonerations requests and allow the imported goods out of the customs.
- (vi) **Value added tax two-year exonerations for the supply of electric power** between electric power service companies, either directly or through interconnected systems.

- ***The financial and administrative control regime for State companies has been modified***

The recent modifications incorporated into the financial and administrative control legal regime applicable to State companies - particularly by means of the Public Sector Financial Administration Organic Act, and the Independent Entities, State Companies, Foundations, State Associations and Partnerships Assignment to Public Administration Agencies Act - have influenced some of the proceedings and requisites which such companies need to fulfill in order to enter into agreements, establish businesses, transfer property and undertake financial obligations. Therefore, the novelty of the current legal *status-quo* obviously demands a careful examination of the transactions being planned - in furtherance of the objective of diminishing the risks of electric power shortage - by State electric service companies.

- ***National Transmission Company among the plans of the Executive Branch***

Regarding the national infrastructure for electricity transmission and the services supported by it as elements of strategic importance for security, defense and national economic growth, the Executive Branch issued a Decree published in Official Gazette # 37400 on March 8, 2002, ordering the integration of a Commission by the Energy and Mines Secretary and the Planning and Development Secretary with the responsibility of proposing to the Venezuelan President such necessary measures for the creation of a National Electric Power Transmission Company. Accordingly, the Commission shall conceive and propose the mechanisms for allocating the assets of the State companies CADAPE and EDELCA to the formation of the corporate capital and equity of the new State company. In pursuing its *raison d'être*, the Commission may ask for the opinion of public officers and other persons specialized in the subject matter.

TELECOMMUNICATION SECTOR

- ***Long distance telephone services opening***

Consistently with the telecommunications opening process, on March 19, 2002, CONATEL issued an "Order Regarding Access by Local Telephone Service Users to Long Distance Telephone Services through Direct Dialing." Thus, Venezuela implements an operator selection mechanism involving an "independent third party" (the Data Base Manager or DBM, role played in Venezuela by NCS Pearson), who shall be in charge of validating the requests of those long distance operators selected by users and allowing that long distance calls be automatically carried through pre-selected networks. Although the regulations also provide for a "code dialing" selection mechanism allowing users to select the long distance operators of their preference on a per-call basis by dialing the prefixes assigned to such operators, for the

time being, the direct dialing mechanism will do. This mechanism shall be available from long distance operators starting April 5, 2002.

- ***"Resale" of telecommunication services***

The ability to legally provide fixed and mobile telephone services, domestic and international long distance telephone services, private network services, etc., implies the prior granting of service-specific telecommunication licenses by the Venezuelan Regulatory Entity, CONATEL. However, the resale of telecommunication services by third party vendors - as long as such services are technically rendered by a duly licensed operator - is not regulated in Venezuela. Consequently, the resale of telecommunication services constitutes a money-making opportunity for companies seeking to serve clients and to lightly and expeditiously take their share in this line of business without incurring in the associated costs and without undertaking the obligations that accompany telecommunication licenses. Thus, the possibility to legally resell telecommunication services - without authorization by the regulatory entity - opens a world of opportunities regarding services proposals that may now include telecommunication services alone or in addition to core offerings. All that is needed is imagination and good strategic partners duly authorized by CONATEL to technically provide the specific telecommunication services being resold. This is, precisely, one of the benefits brought by the new Telecommunications Organic Act and the opening, not yet exploited in the Venezuelan market.

CASE LAW TRENDS

- ***Modification of the jurisdictional competency regarding administrative contracts***

By its judicial decision of March 12, 2002, the Political-Administrative Court Room of the Supreme Tribunal of Justice established that "a coherent interpretation of number 14 of article 42 of the Supreme Court of Justice Organic Act in the light of the principles contained in the new Constitution and its original purpose as temporary organizer of the administrative jurisdiction", leads to the conclusion that regarding administrative contracts the jurisdictional competency of the Political-Administrative Court Room is generally limited to hear cases related to agreements to which the Republic is a party. Additionally, the jurisdictional competency to hear cases related to the interpretation, performance, expiration, nullity, validity or anticipated termination of administrative contracts to which a State or a Municipality is a party, resides only with the Political Administrative Court Room when the importance and impact of the case on the people so demands. Thus, cases not involving such importance and impact on the people - such as those relating to public lands - shall be heard by the regional Superior Administrative Tribunals. Therefore, until the new

Administrative Litigation Statute is enacted, judges and legal authors shall undertake the task of determining the scope of such "special importance and impact on the people" which is the governing rule of law to be applied when the jurisdictional competency is at bar regarding administrative contracts to which States and Municipalities are parties.

ECONOMIC NEWS

• ***Devaluation***

After the implementation of a free fluctuation scheme in mid February, the value of the national currency registered an abrupt descent with respect to the US\$ which reached quotations of more than Bs. 1,100.00 per US\$ 1.00. This meant a devaluation of almost 30%. However, as a consequence of the US\$ auctions conducted daily by the Venezuelan Central Bank, the exchange rate has tended to stabilization below the Bs. 950.00 per US\$ 1.00 level. Such situation triggered an inflation rate increase affecting even the prices of goods made in Venezuela.

• ***B.D.T. prints value on cash and subtracts value from electronic money.***

The Bank Debit Tax (B.D.T.) arrived to be imposed on all debits registered in accounts existing in financial institutions. This is clearly a rough mechanism that breaks the financial equilibrium in commercial relations. Thus - as usually done in the past to reduce the budgetary deficit - the Venezuelan State once again opted for disguising a confiscation with a robe of legality, allowing itself to take from account holders 0.75% of the amount of every bank debit without taking into consideration their tax paying capacity. Then, in such circumstances, businesses find themselves in a situation where optimization of their paying processes in function of the B.D.T. is necessary, as well as the reduction - to the maximum extent possible - of daily deposits in the financial system, in order to control the increase in their transactional costs and expenses. Accordingly, we see a clear business opportunity for cash transportation companies which may now offer a very attractive service to businesses that collect large amounts of cash from their customers every day. A cash transportation company, prior instructions from its clients, may take the cash collected by the latter from customers and make payments directly to its clients' suppliers before depositing the money in financial institutions and, therefore, legitimately escape the B.D.T. taxable event. In other words, the service would consist of using the cash before it becomes electronic money in financial institutions and falls under the umbrella of the B.D.T. Most probably, the service price will be lower than the amount of the B.D.T.

• ***Entering into force of the new Income Tax Act***

On February 19, 2002, a complaint requesting the nullification of article 199 - on the ground of its unconstitutionality - of the Income Tax Act (I.T.A.)

published in Official Gazette on December 28, 2001, was filed before the Constitutional Court Room of the Supreme Tribunal of Justice. Article 199 establishes that the new law enters into effect on the same day of its publication in Official Gazette. The complaint is based on the constitutional prohibition for tax laws to enter into effect on the same day of its promulgation, given that the Constitution mandates that every new tax law shall provide for a *vacatio legis* which must elapse before the new law enters into effect. Should the Supreme Tribunal rule in favor of the plaintiff, the new Income Tax Act will not be applicable to the fiscal year started on Jan. 1, 2002 but to the fiscal year starting on Jan. 1, 2003. That is, the new statutorily established prohibition to add or offset foreign losses to national losses or against national net income, the new dividends, inflation adjustment and transfer pricing regimes would not be applicable to the fiscal year started on Jan. 1, 2002; therefore, its application will have to be deferred for the fiscal year starting on Jan. 1, 2003. However, the complaint has not yet being admitted by the Constitutional Court Room despite its urgency.

Regional Insight

TOWARDS THE ANDEAN COMMON MARKET IN 2005

On their way towards the Common Market in 2005, the Andean Community countries are taking giant steps eliminating restrictions for commercial services in the sub-region. Particularly, such liberalization is already a reality regarding telecommunication services (except for radio broadcasting and television services). That is, under the schedule provided by Decision # 462 of the Andean Community Commission, all in-country restrictions that member countries could impose on such services have been removed, so currently, even local telephone services, domestic and international long distance telephone services and mobile telephone services have been liberalized. However, with respect to the practicality of such liberalization, it is fair questioning what its tangible benefits are - from a legal standpoint - for telecommunication companies planning to operate in more than one member country. Well, apparently none. In accordance with Decision 462, telecommunication service providers operating in any of the Community member countries may only establish, install, acquire, lease, exploit or supply networks or telecommunication services in any other member country, prior internal confirmation of their respective licenses. Such confirmation will be granted under the terms and conditions established by internal regulations of the granting member country and not according to the conditions rights and obligations provided by the license issued by the country of origin. Accordingly, given that the applicable regulations for

the definition of telecommunication services, their scope, as well as the rights and obligations associated to such activities, shall be those provided by the national legislation of the specific member country granting confirmation of a license, a long way is still ahead to make different domestic service categories match in order to define several telecommunication services and identify the applicable regulatory framework within each member country. In facing this problem, the "functional equivalence" principle should definitely be of great use.

NEW FINANCING SOURCE FOR DEVELOPMENT

• *The Kyoto Protocol*

The Kyoto Protocol (December 11, 1997) of the United Nations Main Convention (May 9, 1992) is opening new doors to what will become an important financing source for developing countries with the capacity to absorb greenhouse effect gases (GEG) through forestry projects. Latin-American countries have a great opportunity to benefit from the sources obtained from selling Emission Reduction Certificates (ERC) that will be issued once they have fulfilled the requirements established by the Clean Development Mechanism (CDM), an international entity in charge of managing the program.

• *Carbon World Market*

Industrialized countries produce nearly 55% of the world pollution, affecting the climate and producing high temperatures whose consequences can be devastating. Through the Kyoto Protocol these countries commit themselves to reduce their greenhouse effect emanations (GEE) in 5% compared to the level registered in 1990 by the period between 2008 and 2012. This reduction is costly and it affects these countries' production processes. On the contrary, developing countries produce less GEE and besides, they have the capacity to clean the atmosphere at low prices. It is in these countries where the adequate use of natural resources can become an interesting source of income by offering industrialized countries forestry projects to reduce additional GEE to that which nature would absorb spontaneously without these projects existence. Having reached the adequate GEE through the financing of projects to reduce GEE, industrialized countries can fulfill their commitments under the Kyoto Protocol. The price of each ERC (equivalent to a ton of CO₂ that can be absorbed) is estimated between US\$ 6 and US\$19 depending on demand. Assigning these a low price of US\$10, a country like Colombia could receive an income close to US\$ 450,000,000.00 yearly.

• *Latin-American progress*

To access CDM resources countries need to go through a series of stages and requirements without which they will not be able to offer their projects. In first place, countries must participate voluntarily. They must

ratify the Kyoto Protocol and name a national authority to manage their projects locally. Also, they must overcome a series of complex stages until their ERCs are issued. Countries such as Colombia and Nicaragua have seen the potential of CDMs and they are ready to claim their share in a blooming market with few competitors who still remain uninformed. Venezuelans could use their potential oxygen sales to finance reforestation projects in areas such as the *Caroní* basin which has been severely affected by gold mining.